

<b>Medio</b>	Capital
<b>Fecha</b>	28/04/2016
<b>Mención</b>	Gratuidad a prueba. Habla ex rector Fernando Montes SJ.



Jueves, 28 abril, 2016 Por: Revista Capital Con proyectos de infraestructura congelados, menos gastos en extensión y ahorros hasta en ampolletas, las universidades privadas intentan sortear la caída en sus ingresos tras haber adherido a la gratuidad. Por: Natalia Saavedra M. Ilustración: Ignacio Schiefelbein Ya no hay cóctel para los graduados, ni viajes a seminarios fuera de Chile. Los proyectos de infraestructura están frenados y varias están pidiendo adelantos a los bancos. Las universidades privadas viven hoy un clima de incertidumbre. La gratuidad, a la que varias se plegaron a partir de este año, les ha obligado a implementar importantes ajustes en su presupuesto. ¿La razón? Las diferencias entre los aranceles reales que cobran y lo que les paga el Ministerio de Educación por cada alumno que es financiado por el Estado. En lo inmediato, el principal problema son los flujos de caja: aún no existe un balance final de cuántos son los estudiantes que tendrán gratuidad en cada carrera, lo que sólo quedará claro hasta avanzado mayo. Por lo mismo, no está despejada la duda de cuánto será el desembolso que mes a mes hará el Estado por alumno. “Es similar al CAE”, dice un rector, explicando que las partidas por el Crédito con Aval del Estado llegaban dos o tres veces al año, pero jamás de manera mensual. A mediano y largo plazo, el dilema de los rectores es cómo suplir la diferencia de ingresos en las universidades cuando su universo de gratuidad sea cada vez mayor. Sólo en 2016, las casas de estudios han reducido sus ingresos de forma brusca: 1.500 millones de pesos menos de golpe para la Finis Terrae y un ajuste de 3.000 millones de pesos en el presupuesto de la Diego Portales, son algunos de los efectos. El golpe en la UDP “Nos hemos tomado el ajuste con buena cara, pero hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el tiempo”. Así describe un académico el ambiente que se vive al interior de la Universidad Diego Portales (UDP). Esto luego de que cerca del 40% de sus estudiantes de primer año se adhirieran al beneficio, y con ello,

hicieran retroceder los ingresos de la casa de estudios. No fue sorprendente, aseguran, y se prepararon para un escenario de menor holgura. Pero el reajuste no los pilló en el mejor momento. La implementación de las normas IFRS y el gasto (desde 2011) en programas de especialización, les significaron terminar 2014 con una pérdida superior a los 1.800 millones de pesos (estimadas en 800 millones para 2015) y con la meta de, pese a la caída en ingresos, terminar 2016 sin el balance en rojo. El ahorro tenía que ser significativo, aunque la premisa fue no tocar a los profesores ni afectar los programas que imparten, asegura su rector, Carlos Peña. “La UDP ha efectuado un ajuste absorbiendo la gran brecha entre el arancel que cobrábamos y el que tiene en cuenta el Estado para la gratuidad. Asumimos esa diferencia, que es cercana a los tres mil millones de pesos. Pese a eso, nadie puede decir que esto es sorprendente”, manifiesta. Como la meta era no reducir el personal, echaron mano al 35% de su presupuesto que no tiene relación con recursos humanos: marketing, extensión, programas de internacionalización, viajes, seminarios, visita de profesores extranjeros y la actividad de su editorial acusaron el golpe. Un académico de la UDP que grafica la situación, plantea: “Si antes podíamos darnos el lujo de que nos pagaran ir a un simposio fuera de Chile, sabemos que no podemos hacerlo por el momento. Esos ajustes se asumen bien, lo que preocupa es qué pasa si el ahorro se vuelve permanente y cada vez más profundo”. Dentro de los recortes que más se han sentido a nivel público está su editorial. La UDP entregaba a dicha institución un subsidio anual de cerca de 450 millones de pesos. La partida se cortó a la mitad. También las invitaciones a profesores extranjeros se restringieron drásticamente. Si antes dos académicos internacionales visitaban la UDP por semana, esas visitas se reducirán en casi un tercio durante 2016. Peña, en todo caso, aclara que hay programas, que pese a ser deficitarios, no están dispuestos a tocar. Uno de ellos es el de doctorados. Eso pese a que en el sistema universitario se señala que a la UDP le ha costado despegar con este proyecto. “Debido a que algunos de los programas no se encuentran acreditados –Psicología y Ciencias Políticas– la UDP ha becado directamente a alumnos que los cursan, lo que les ha significado un gran gasto de plata. Pero hay una decisión política de no cerrarlos”, dice un profesor de las especializaciones. Peña asegura que esos programas “no se tocan, no es necesario”. En el congelador también seguirá la intención de la universidad de expandir su campus de Huechuraba. Ahí poseen tres hectáreas donde tienen presupuestado, una vez que las condiciones de la reforma se aclaren, ampliar sus dependencias. Aunque la posición del rector para este año es recortar para aguantar el golpe, es tajante al afirmar que los recursos entregados por gratuidad no son sustentables en el tiempo. Incluso, deja abierta la puerta a evaluar su adhesión a la política pública en caso de que persistan las consecuencias en sus finanzas. “Nuestra máxima es que nuestros académicos tengan un tercio del tiempo para investigar, pero eso se complica, es muy caro. Es necesario que se corrijan las distorsiones que tenemos frente a las universidades del CRUCH”, señala el ex rector de la UAH, Fernando Montes. “Lo digo con toda claridad: no hay ninguna universidad del sistema que para 2017 pueda hacer ajustes como éste. No se puede y sería un desastre para el sistema. Con toda claridad, si el panorama se repite y llegamos a la conclusión de que para persistir a la gratuidad debemos hacer un ajuste similar, la UDP no se plegaría a la gratuidad, así de simple”,

asegura Peña. Al congelador La UDP no es la única universidad que está recortando su presupuesto. Cristián Nazer, rector de la Universidad Finis Terrae (UFT), relata que han sido meses de mucho ingenio para operar con menores flujos de caja. Ya han recibido dos pagos del gobierno relativos a la gratuidad, pero no son regulares. Para ordenarse, pidieron plata a la banca, aprovechando una línea de crédito que les otorgan a la universidad con cargo de las platas de CAE. “Fue un resquicio para poder ordenarnos. Es un préstamo que tiene poco interés, pero de todos modos lo tiene”, explica Nazer. “Hemos postergado inversiones, pero por otro lado, hemos tenido una mayor cantidad de alumnos que ha compensado en parte los menores ingresos por la gratuidad. La duda es qué pasa los siguientes años”, añade. Dentro de los proyectos congelados se cuenta la construcción de una nueva facultad para Arquitectura y Diseño, que costaría cinco millones de dólares. Hoy no están las condiciones para endeudarse, pero además la banca está reticente a prestarles dinero a las universidades. “La gratuidad nos genera una diferencia por alumno de cerca de 25% versus el arancel real y hay que buscar la fórmula de compensarlo. Lo lógico sería que el Estado compense parte de eso, porque son los fondos que van a lo que no es docencia directa, pero igualmente importante para el proyecto como extensión, desarrollo académico e infraestructura”, dice Nazer. Otras universidades del sistema han optado por una economía de guerra. Así lo admite el ahora ex rector –dejó la universidad oficialmente la semana pasada– de la Alberto Hurtado (UAH), Fernando Montes. “Nuestro ahorro es a tal nivel que debemos ser la única universidad que no tiene vehículos propios. Decidimos no renovar ningún equipo tecnológico y además obviamente nuestro proyecto de infraestructura, que es caro, pues hemos optado por estar cerca del metro al ser una universidad inclusiva, está congelado. Hemos tenido que dejar proyectos también, como un centro de investigación social que teníamos. Hasta las ampollitas que compramos cuentan”, asegura al sacerdote. “Con toda claridad lo digo: si el panorama se repite y llegamos a la conclusión de que para persistir a la gratuidad debemos hacer un ajuste similar al de este año en 2017, la UDP no se plegaría a la gratuidad, así de simple”, asegura Carlos Peña. Montes apuesta a que el gobierno se dará cuenta de la precariedad con la que operan y determinará dentro de la reforma un aporte basal para investigación al que accedan las privadas, lo que les permitiría contar con fondos frescos. “Nuestra máxima es que nuestros académicos tengan un tercio del tiempo para investigar, para darle calidad al proyecto, pero eso se complica, es muy caro. Además, ahora estamos desarrollando nuestro plan estratégico para los próximos años y es necesario que se corrijan las distorsiones que tenemos frente a las universidades del CRUCH”, señala el ex rector de la UAH. ¿Un no definitivo? Desde las universidades que no se sumaron a la gratuidad, argumentan razones de fondo y de forma para no hacerlo. Al interior de la UNAB, señalan, siempre consideraron el proyecto poco consistente. En la evaluación que hicieron, además, pesó que las diferencias de caja que se le generarían harían insostenible su quehacer. “Estamos siempre dentro de las primeras cinco universidades en investigación y tras las estatales más renombradas. Entonces, si nos sumábamos al proyecto, cómo financiábamos un punto relevante de nuestra actividad”, dice una fuente de la institución. De acuerdo a un estudio estimativo realizado en 2015 por Acción Educar, que analizó 2.621 carreras de diferentes

universidades, un 38% presentaría un déficit entre los aranceles reales y referenciales. La investigación reveló que la mayor brecha se detectaría en la Universidad Finis Terrae, donde según los cálculos del estudio, la diferencia entre lo aportado por el gobierno y el valor lista de la colegiatura en medicina alcanzaría los 2,5 millones de pesos. “Lo anterior implica que educar a un niño vulnerable en la carrera de Medicina es, para la Universidad Finis Terrae, 2,5 millones de pesos anuales más caro que recibir y matricular a un estudiante que se ubique entre los deciles de ingresos más acomodados (es decir, entre el sexto y décimo decil de ingresos). La política de gratuidad impulsada por el gobierno y que se basa en la fijación de aranceles para las instituciones que adhieran a ella y respecto de un determinado grupo de alumnos, conlleva una serie de riesgos como presupuestos deficitarios de las instituciones, alta dependencia de los recursos estatales y un condicionamiento del desarrollo y crecimiento de las universidades a esos factores. Estos riesgos se verán potenciados en la medida que la política de gratuidad se extienda a estudiantes de mayores ingresos”, dice el estudio. Dentro de las privadas con mayores brechas según el informe, están –además– la UDP con 2.413.000 pesos en odontología y 2.302.000 pesos en medicina. Se suma también la Universidad Autónoma, con 2.199.000 pesos en odontología. Para Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, el problema al establecer aranceles de referencia radica en que los proyectos universitarios no pueden compararse, pues tienen un costo diferente por alumno. “Fijar el precio para dos universidades diferentes es muy aleatorio. Para que cobren lo mismo deberían tener la misma carrera, el mismo número de alumnos, la misma malla, los mismos profesores, idénticos metros cuadrados construidos y la misma cantidad de computadores, entre otras cosas. Es imposible calcularlo de forma universal”, asegura. Con todo, la Confech ha sido partidaria de que los aranceles se equiparen, ya que la situación afecta de igual manera a la caja de las universidades tradicionales (en promedio los aranceles reales superan en 700 mil pesos a los referenciales). A la vez, sin existir una definición oficial, la División de Educación trabaja en fórmulas para corregir la distorsión, aunque no se han revelado los caminos que evalúa para hacerlo. Consultados por Capital, prefirieron no hacer declaraciones.